

1190

 <b>CONTRALORÍA</b> GENERAL DE LA REPÚBLICA	<b>AUTO N°:</b> 000245
	<b>FECHA:</b> 08 JUN 2018
	PÁGINA 1 DE 36

**POR EL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

<b>TRAZABILIDAD:</b>	2015IE0111721
<b>PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N°:</b>	PRF _____ 88112-2017-002
<b>NÚMERO SAE:</b>	
<b>CÓDIGO ÚNICO NACIONAL:</b>	AC-88112-2017-22490
<b>ENTIDAD AFECTADA:</b>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> N.I.T. 899.999.098-0
<b>CUANTÍA INICIAL ESTIMADA DEL DAÑO [NO INDEXADA]:</b>	OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$896.044.974).
<b>PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES:</b>	<p><b>CARLOS ARDILA BALLESTEROS</b>, identificado con cédula de ciudadanía N°13'827.774, en su condición de Presidente de la Mesa Directiva de la <b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> para la época de los hechos en relación con <b>ALVARO TORRES TELLEZ</b>.</p> <p><b>JAIRO JARAMILLO MATIZ</b>, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.452.839, en su condición de Director Administrativo de la <b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b>, para la época de los hechos.</p> <p><b>DIANA ROJAS BRÍÑEZ</b>, identificada con cédula de ciudadanía No. 52'967.933, en su condición de Jefe División de Personal de la <b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b>, para la época de los hechos.</p> <p><b>BLANCA EMMA SALAZAR BONILLA</b>, identificada con la cédula de ciudadanía No.41.755.873, en su condición de Jefe de la División Financiera de la <b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b>, para la época de los hechos.</p>

Carrera 69 No. 44 - 35 Piso 1 • Bogotá, D. C. • Colombia •  
Código Postal 111321 • PBX: 5187000 • cgr@contraloria.gov.co • www.contraloriagen.gov.co



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUTO N°: 000245

FECHA: 08 JUN 2018

PÁGINA 2 DE 36

AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

	<b>CARLOS ALBERTO FLÓREZ ROJAS</b> , identificado con cédula de ciudadanía No.19.395.467, en su condición de Jefe de la Dirección Jurídica de la <b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> , para la época de los hechos.
<b>TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE:</b>	<b>POR ESTABLECER</b>

## 1. ASUNTO

El Despacho de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República, a proferir Auto de Apertura de Proceso de Responsabilidad Fiscal en los términos del artículo 40 y 41 de la Ley 610 de 2000, con ocasión de los hechos que se trasladaron como irregulares respecto a la gestión fiscal adelantada en la **CÁMARA DE REPRESENTANTES**.

## 2. FUNDAMENTOS DE HECHO

Como resultado de la verificación de la denuncia ciudadana con radicado 2011-3173482111-D, la Contraloría Delegada para Gestión Pública e Instituciones Financieras, detectó que durante los años 2011 a 2015, en la **CÁMARA DE REPRESENTANTES**, se reconoció y pagó por concepto de prima técnica de once (11) funcionarios de dicha Corporación, que se relacionan a continuación: CAYO RICARDO BUITRAGO ESPEJO, en su condición de Operador de Sistemas, Secretaría General; HAROLD ALFONSO BUSTAMANTE SOTO, en su condición de Operador de Sistemas en la Comisión Legal de Cuentas, ROSALBA CARVAJAL PARRA, en su condición de Operador de Sistemas de la Segunda Vicepresidencia; CARMENZA CRUZ PARRA, en su condición de Mecnógrafa Sección registro y Control; GIOVANNY DURLEY GONZALEZ COLORADO, en su condición de Mensajero de la Secretaría General; DIANA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, en su condición de Mecnógrafa de la División de Personal; HUMBERTO GUERRERO ACOSTA, en su condición de Transcriptor de Comisión Especial de Aseguramiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial; ITA MARÍA MARTINEZ LOZANO, en su condición de Transcriptor Sección Grabación; AMANDA TINJACA RUÍZ, en su condición de Mecnógrafa de la Comisión Segunda Constitucional Permanente; HERNANDO RODRÍGUEZ CASTILLA, en su condición de Operador de Equipo Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y ALVARO TORRES TELLEZ, en su condición de Asistente Administrativo, la suma total estimada de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$896.044.974)**.



AUTO N°: 000245

FECHA: 08 JUN 2018

PÁGINA 3 DE 36

AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

### 3. ENTIDAD AFECTADA

La **CÁMARA DE REPRESENTANTES** es una corporación pública perteneciente a la rama legislativa, que junto con el Senado de la República, conforman el Congreso de la República. Su sede está ubicada en la ciudad de Bogotá, D.C., en la Carrera 8ª No. 12 B-42.

El funcionamiento de la **CÁMARA DE REPRESENTANTES** está reglamentado por la Ley 5ª de 1992 y sometido al control fiscal que ejerce la Contraloría General de la República en cuanto a la administración de los recursos públicos asignados para apoyar y asegurar la continuidad de la labor legislativa, la cual está a cargo de la Dirección Administrativa de esa corporación de conformidad con lo establecido en el artículo 382 de la misma ley, adicionado por el artículo 1º de la Ley 1318 de 2009, que dispone: "Parágrafo 2º. El orden administrativo, la competencia para dirigir licitaciones y celebrar contratos, ordenar el gasto y ejercer la representación legal de la Cámara de Representantes en materia administrativa y contratación estatal, corresponden al Director Administrativo".

### 4. COMPETENCIA Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

La Contraloría General de la República es competente para ejercer la acción fiscal y por tanto, iniciar el proceso de responsabilidad fiscal y establecer la responsabilidad que pudiera derivarse de la gestión fiscal desplegada con ocasión del daño producido a los intereses patrimoniales de la **CÁMARA DE REPRESENTANTES**, en virtud de la siguiente normativa:

- ✓ **Constitución Política de Colombia** en sus artículos 267 y 268 numeral 5º, los cuales prescriben que la vigilancia de la gestión fiscal de la Administración corresponde a la Contraloría General de la República, y que es atribución del Contralor, establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma.
- ✓ **Ley 42 de 1993** "Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen".
- ✓ **Ley 610 de 2000** "por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías", modificada parcialmente por la **Ley 1474 de 2011** "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la función pública".
- ✓ **Decreto Ley 267 de 2000** "por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República", que en su artículo 59 determina las funciones de la Dirección de Investigaciones Fiscales.
- ✓ **Resolución Orgánica N° 5500 de 2003** "mediante la cual se determina la competencia para el conocimiento y trámite de la acción de responsabilidad fiscal en la



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUTO N°: 000245

FECHA: 08 JUN 2018

PÁGINA 4 DE 36

**AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

*Contraloría General de la República y se dictan otras disposiciones”, modificada parcialmente por la **Resolución Orgánica N° 5868 de 2007** “por la cual se modifica parcialmente la Resolución Orgánica número 5500 del 4 de julio de 2003, en materia del trámite de la acción fiscal al interior de la Contraloría General de la República”, la cual establece la competencia en razón al Factor Territorial para el conocimiento, trámite y ejecución de las Indagaciones Preliminares Fiscales y el proceso de Responsabilidad Fiscal, a la Dirección de Investigaciones Fiscales.*

Con base en lo anterior y toda vez que los actos de gestión que en el caso es el reconocimiento y pago de primas técnicas involucran recursos del orden nacional manejados por la Cámara de Representantes, le compete a la Contraloría General de la República y dado que el domicilio del sujeto de control es Bogotá, le corresponde a la Dirección de Investigaciones Fiscales.

- ✓ **Resolución Organizacional OGG-0342-2015**, “Por medio de la cual se adiciona el artículo 5 de la Resolución 5500 de 2003 en materia de competencia para el conocimiento y trámite en primera instancia de las indagaciones preliminares y los procesos de responsabilidad fiscal que se adelanten contra los altos funcionarios estatales”, que le otorga al Despacho de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva la competencia cuando se trata de altos funcionarios del Estado, tales como representantes a la Cámara de Representantes.

**5. ANTECEDENTE Y ACTUACIONES SURTIDAS**

1. Formato de Traslado de Hallazgo Fiscal, producto de la Actuación Especial adelantada con ocasión de la denuncia tramitada por la Contraloría Delegada para Gestión Pública e Instituciones Financieras, a los recursos ordinarios del Presupuesto Nacional respecto del rubro de nómina de la Cámara de Representantes, que reportó irregularidades en el pago de primas técnicas a algunos funcionarios sin tener derecho a tal prestación. (Ver fol. 1-8 del expediente).
2. Oficio 2015IE0111721 de 26 de noviembre de 2015 de traslado de hallazgo fiscal de la Contraloría Delegada para Gestión Pública e Instituciones Financieras a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva y de dicha dependencia a la Dirección de Investigaciones Fiscales con Oficio 2015IE0114984 de 07 de diciembre de 2015. (Ver fol. 10 a 11 del expediente).
3. Oficio 2016IE0101951 de 23 de noviembre de 2016 de devolución del hallazgo fiscal a la Contraloría Delegada para Gestión Pública e Instituciones Financieras (Ver fol. 16-27 del expediente).
4. Oficio 2017IE0007105 de 30 de enero de 2017 de asignación del antecedente para sustanciación de la indagación preliminar (Ver fol. 28 del expediente).
5. Auto No. 008 de 06 de febrero de 2017 mediante el cual se ordena iniciar la Indagación Preliminar No. 88112-2017-002 proferido por la Dirección de Vigilancia

**AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

Fiscal de la Contraloría Delegada para Gestión Pública e Instituciones Financieras  
(Ver fol. 29-36 del expediente).

6. Oficio 2017IE0064785 de 14 de agosto de 2017 con el cual se remite por competencia la Indagación Preliminar No. 88112-2017-002, que recomienda apertura de proceso de responsabilidad fiscal (Ver fol. 1152-1164 del expediente).
7. Oficio 2017IE0084968 de 18 de octubre de 2017 de traslado de la Indagación Preliminar No. 88112-2017-002 a la Dirección de Investigaciones Fiscales (Ver fol. 1165-1166 del expediente).
8. Oficio 2018IE0015694 del 27 de febrero de 2018 por medio del cual la Dirección de Investigaciones remitió por competencia el expediente a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva. (Ver fol. 1167)

**6. RELACIÓN DE EVIDENCIAS PROBATORIAS RECAUDADAS EN  
DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL Y DE LA INDAGACIÓN  
PRELIMINAR**

El expediente contentivo de la indagación preliminar adelantada con ocasión de las posibles irregularidades que comprometerían los intereses patrimoniales de la **CÁMARA DE REPRESENTANTES**, contiene los medios de prueba que se enuncian a continuación, aportados y recaudados en legal forma en desarrollo del proceso auditor y en el curso de la indagación preliminar ahora objeto de evaluación y respecto de los cuales, al plasmar las consideraciones de este proveído, se procederá a realizar el análisis jurídico en el que, honrando las reglas de la sana crítica, serán conjugados los diversos elementos probatorios, sin incurrir en un examen aislado de cada probanza, y buscando una estimación conjunta de la totalidad de pruebas articuladas y examinadas, como un compuesto integrado por elementos heterogéneos a través de los cuales se llega a un convencimiento equilibrado y único, valoración que se realizará en función de la naturaleza de la decisión que se adopta y sobre la cual se habrá de edificar, a saber:

**VISITA ESPECIAL:**

**A. Actas de visita Fiscal** de fechas 22, 24, 27, 29 y 31 de marzo de 2017 con sus anexos, para practicar la prueba ordenada en el Auto de Apertura consistente en examinar las hojas de vida de los empleados **ITA MARÍA MARTINEZ y AMANDA TINJACA RUÍZ; HUMBERTO GUERRERO ACOSTA, CAYO RICARDO BUITRAGO ESPEJO, GIOVANNY DURLEY GONZÁLEZ COLORADO y LUZ DARY SEGURA CORDON; DIANA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ y CARMENZA CRUZ PARRA; HAROLD ALFONSO BUSTAMENTE SOTO, JOHN ABDENAGO VALOYES ASPRILLA; ÁLVARO TORRES TELLEZ; HERNANDO RODRÍGUEZ CASTILLA y ROSALBA CARVAJAL PARRA**, en su orden. (Ver Folios 933 a 951 del expediente).

**B. INFORME TÉCNICO:**



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUTO N°: 000245

FECHA: 08 JUN 2018

PÁGINA 6 DE 36

**AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

Con **Oficio 2017IE0062703 de 04 de agosto 2017**, la profesional universitaria LUISA FERNANDA MIRANDA SOTO presentó, previa designación, Informe de Apoyo Técnico a la Dirección de Vigilancia de la Contraloría Delegada para Gestión Pública e Instituciones Financieras, con el objeto de verificar y/o validar los cálculos *respecto de los pagos de primas técnicas a funcionarios de la Cámara de Representantes*. (Ver folios 1143 del expediente).

**C. DOCUMENTOS:**

1. Soporte Documental allegado con el Formato de Traslado de Hallazgo Fiscal. (Ver CD folio 9 del expediente)
2. Oficio 2017IE0012364 de 13 de febrero 2017, mediante el cual se realiza un traslado de pruebas a la indagación preliminar objeto de estudio. (Ver folios 41 a 103 y del expediente).
3. Copia resolución M.D. –Manual de Funciones, Congreso de la República de Colombia. (Ver folios 104 a 119 del expediente).
4. Oficio 2017ER0018029 de 22 de febrero de 2017, mediante el cual el Secretario General de la Cámara de Representantes, remite información solicitada por la Contraloría General de República. (Ver folios 120 a 986 y CD a folio 134 del expediente).
5. Oficio 2017ER0062820 de 27 de junio de 2017, mediante el cual se allega información a la Contraloría General de la República por parte del Jefe de la División de Personal de la Cámara de Representantes. (Ver folios 990 y CDs folios 951, 979, 986 y 991 del expediente).
6. Oficio D.P.4.1-1944-17 de 12 julio de 2017, mediante el cual se remite información a la Contraloría General de la República, por parte del Jefe de Personal de la Cámara de Representantes. (Ver folios 999 a 1137 del expediente).
7. Oficio 2017IE0062703 de 04 de agosto de 2017, por la cual se allega Informe Técnico. (Ver folios 1143 a 1144 del expediente).

**7. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO**

Sabido es que el proceso de responsabilidad fiscal tiene por finalidad obtener una declaración jurídica en la cual se precise con certeza que un determinado servidor público o particular debe cargar con las consecuencias que se derivan de sus actuaciones irregulares en la gestión fiscal que ha realizado y que está obligado a reparar económicamente el daño causado al erario por su conducta dolosa o culposa.

Respecto al objeto de la responsabilidad fiscal, nótese que el artículo 4º de la Ley 610 de 2000 es claro en definir que ésta tiene por objeto *“el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa*

1173



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUTO N°: 000245

FECHA: 08 JUN 2018

PÁGINA 7 DE 36

**AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

*de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal."*

Sobre este particular, el Consejo de Estado, en concepto proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del 03 de octubre de 1995, con radicación No. 732 y ponencia del magistrado Javier Henao Hidrón, se refirió en los siguientes términos:

*"El objeto de la responsabilidad fiscal consiste en que las personas encargadas de la recaudación, manejo o inversión de dineros públicos o de la custodia o administración de bienes del Estado, que por acción u omisión y en forma dolosa o culposa asuman una conducta que no está acorde con la Ley - o cualquier otro funcionario que contraiga a nombre de los órganos oficiales obligaciones no autorizadas por aquella - deberán reintegrar al patrimonio público los valores correspondientes a todas las pérdidas, mermas o deterioros que como consecuencia se hayan producido".*

Relevante igualmente es destacar, según lo previene el contenido del artículo 40 de la Ley 610 de 2000, que se ordenará abrir el proceso de responsabilidad fiscal cuando se encuentra establecida la existencia del daño, lo que equivale a dar por sentado que éste se haya consumado o producido, en tanto la pretensión del proceso se orienta, no a establecer la existencia de aquel, sino a determinar si los presuntos responsables tienen o no la obligación de responder por el mismo.

Es por tanto conveniente sobre este punto, enfatizar la concepción legal de daño que introduce la Ley 610 de 2000 en su artículo 6º, así:

**"Artículo 6. Daño patrimonial al Estado.** Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las Contralorías.

*Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público." El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007.*

Desde la teoría general del Daño se destaca que éste debe ser cierto, es decir, que aparezca prueba de la acción lesiva del agente que ha producido una disminución patrimonial.

Siendo claro que el daño patrimonial al Estado debe acontecer en el desenvolvimiento de la gestión fiscal, la cual está definida por la Ley 610 de 2000, en los siguientes términos:

**"Artículo 3. Gestión fiscal.** Para los efectos de la presente Ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación,

**AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

*administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales".*

En tal sentido, se tiene entonces que la gestión fiscal es la actividad reglada o contractual que cumplen los servidores públicos y las personas de derecho privado [en cuanto realizan función pública], que les otorga capacidad jurídica para administrar o disponer del patrimonio público en aras de una correcta adquisición, debida planeación, indispensable conservación, sana administración, acuciosa custodia, razonable explotación, cuidadosa enajenación, necesario consumo, legal adjudicación, prudente gasto, diligente inversión y pertinente disposición del mismo.

Constituyéndose tal elemento en vinculante y determinante de las responsabilidades inherentes al manejo de los recursos y rentas por parte de los servidores públicos y de los particulares, siendo por tanto indiferente la condición pública de quien ejerce dicha gestión, es decir, que la Gestión Pública está ligada a la hacienda y utilidades estatales inequívocamente guardados bajo la titularidad administrativa o dispositiva de un servidor público o de un particular, concretamente identificados.

En suma, la gestión fiscal que produce daño es aquella antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, lo cual indica que el daño patrimonial al Estado se presenta cuando quien ejerce aquella, actúa de forma contraria a los principios que rigen la función pública en general y la gestión fiscal en particular.

Sin embargo, no toda conducta del servidor público o de las personas de derecho privado es objeto de interés para el proceso de responsabilidad fiscal, sino sólo la que se relaciona con el manejo o administración de bienes o fondos públicos, esto es, actos, hechos, operaciones y contratos que signifiquen disposición de los mismos.

En tanto gestores fiscales, los particulares también pueden ser sujetos de responsabilidad fiscal. Entre los particulares que realizan gestión fiscal ocupan lugar primordial los contratistas estatales, ya que al administrar bienes públicos son colaboradores del Estado en la búsqueda de los fines colectivos, y en la medida en que el ordenamiento jurídico les otorga derechos, también les obliga a manejar los fondos estatales con sujeción a los principios de la función pública y de la gestión fiscal.

Partiendo de los enunciados normativos antes descritos, a fin de establecer los presupuestos necesarios que permitan arribar a la conclusión de encontrarse establecida la existencia de un daño patrimonial al Estado e indicios serios sobre los posibles autores del mismo y por ende, adoptar la decisión o no de ordenar abrir un proceso de responsabilidad fiscal conforme las voces del artículo 40 de la Ley 610 de 2000, conveniente resulta establecer las circunstancias en las que se presentaron los hechos objeto de reproche.

**A. DETERMINACIÓN DEL DAÑO FISCAL Y DE SU CUANTIFICACIÓN:**



**AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

Para contextualizar el asunto materia de reproche resulta pertinente recordar la normativa que reglamenta la Asignación de Prima Técnica, para los funcionarios de la **CÁMARA DE REPRESENTANTES**:

1). **Ley 52 de 1978**, "Por la cual se determinan la planta de personal para el Congreso Nacional, se fijan sus asignaciones y se dictan otras disposiciones", estableció en el artículo 9º lo siguiente:

*"Las Comisiones de la Mesa del Senado y de la Cámara de Representantes podrán reconocer prima técnica hasta por un valor equivalente al cuarenta por ciento (40%) de la asignación básica mensual a los funcionarios elegidos por las plenarias de ambas corporaciones; y los Directores Administrativos, a los Secretarios de las Comisiones Constitucionales y Legales Permanentes y a aquellos empleados cuyas funciones sean de carácter técnico definido por la ley [...]"*

La disposición anterior de forma expresa autorizó la asignación de Prima Técnica por parte de las Comisiones de las Mesas Directivas del Senado y de la Cámara de Representantes hasta un 40% de salario a los funcionarios elegidos por las plenarias de ambas corporaciones, así como a los Directores Administrativos, a los Secretarios de las Comisiones Constitucionales y Legales Permanentes, y a los empleados definidos por la ley que ejercieran funciones de carácter técnico.

2). **Decreto 1661 de 1991**, "por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica, se establece un sistema para otorgar estímulos especiales a los mejores empleados oficiales y se dictan otras disposiciones", determina en los artículos 1, 2 y 3, que:

*"Art. 1. DEFINICIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN: La Prima Técnica es un reconocimiento económico para atraer o mantener en el servicio del Estado a funcionarios o empleados altamente calificados que se requieran para el desempeño de cargos cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos técnicos o científicos especializados o la realización de labores de dirección o de especial responsabilidad, de acuerdo con las necesidades específicas de cada organismo."*

*Art. 2. CRITERIOS PARA OBTENER PRIMA TÉCNICA. Para tener derecho a prima técnica serán tenidos en cuenta alternativamente uno de los siguientes requisitos: A)-Título de formación avanzada y experiencia calificada mínima 3 años y B)-Evaluación del desempeño [...]"*

*Artículo 3º.-Niveles en los cuales se otorga Prima Técnica. Para tener derecho al disfrute de Prima Técnica con base en los requisitos de que trata el literal a) del artículo anterior, se requiere estar desempeñando un cargo en los niveles profesional, ejecutivo, asesor o directivo. La Prima Técnica con base en la evaluación del desempeño podrá asignarse en todos los niveles [...]"*

Las disposiciones transcritas denotan específicamente tres temas a saber: a) La definición de Prima Técnica, como un reconocimiento de índole económico cuyo propósito es atraer o mantener en el ejercicio del cargo a servidores altamente calificados que deban aplicar conocimientos técnicos o científicos especializados o desarrollar labores de dirección o de especial responsabilidad. b) La inclusión de dos criterios para el otorgamiento de la prima técnica; uno relacionado con la formación académica y experiencia, y el otro, con la evaluación del desempeño, y c) La aplicación del reconocimiento a cargos de todos los niveles cuando se fundamente en el criterio de la evaluación del desempeño.



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUTO N°: 000245

FECHA: 08 JUN 2018

PÁGINA 10 DE 36

AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

3) **Decreto 2164 de 1991**, que a su turno reglamentó el Decreto 1661 del mismo año, indicó en el artículo 5°:

*“Art. 5: De la Prima Técnica por evaluación del desempeño. Por este criterio tendrán derecho a prima técnica los empleados que desempeñen en propiedad cargos que sean susceptibles de asignación de prima técnica de acuerdo con lo establecido en el art. 7 del presente decreto, de los niveles directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico, administrativo y operativo o sus equivalentes en los sistemas especiales y que obtuvieren un porcentaje correspondiente al noventa por ciento (90%) como mínimo, del total de puntos de cada una de las calificaciones de servicios realizadas en el año inmediatamente anterior a la solicitud de otorgamiento”.*

*Art. 11: Temporalidad. El disfrute de la prima técnica se perderá: a) Por retiro del empleado de la entidad a la cual presta sus servicios; b) Por la imposición de sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio de las funciones, caso en el cual el empleado sólo podrá volver a solicitarla transcurridos dos (2) años, contados a partir de la fecha de ejecutoria de la providencia mediante la cual se impuso la sanción, siempre y cuando el empleo continúe siendo susceptible de asignación de prima técnica; c) Cuando haya sido otorgada por evaluación del desempeño, se perderá, además, por obtener el empleado calificación de servicios en porcentaje inferior al establecido en el artículo 5o. de este Decreto o porque hubieren cesado los motivos por los cuales se asignó.*

*Parágrafo.- La pérdida del disfrute de la prima técnica operará en forma automática, una vez se encuentre en firme el acto de retiro del servicio, el de imposición de la sanción, o la respectiva calificación [...].”*

La norma anterior ratifica la posibilidad de asignar prima técnica por vía de Evaluación del Desempeño para los funcionarios de todos los niveles jerárquicos, previendo **como requisito adicional, que el funcionario hubiese alcanzado el noventa por ciento (90%) del puntaje total de calificación durante el año anterior a la fecha de asignación de dicha prima técnica y además no encontrarse inmerso en ninguna de las situaciones que originen su pérdida**, dentro de la cual resulta relevante, aquella relacionada con la de mantener una calificación no inferior al 90% **del puntaje total de calificación** en la Evaluación de Desempeño Laboral.

4) **Decreto 1724 de 1997**, derogado posteriormente por el decreto 1336 de 2003, según el cual:

*Art. 1. La prima técnica establecida en las disposiciones legales vigentes, solo podrá asignarse por cualquiera de los criterios existentes, a quienes estén nombrados con carácter permanente en un cargo de los niveles **directivo, asesor o ejecutivo** o sus equivalentes en los diferentes órganos y ramas del poder público. [...]*

*Art. 4. Aquellos empleados a quienes se les haya otorgado prima técnica, que desempeñen cargos de niveles diferentes a los señalados en el presente Decreto, continuarán disfrutando de ella hasta su retiro del organismo o hasta que cumplan las condiciones para su pérdida, consagrada en las normas vigentes al momento de su otorgamiento. [...]*

Disposición transcrita que modificó los niveles de los cargos susceptibles de asignación de prima técnica basados en la formación académica y experiencia, precisando que a partir de su vigencia se otorgaría para los niveles **Directivo, Asesor o Ejecutivo, o sus equivalentes**, dejando sin efecto lo establecido en el Decreto 2164



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUTO N°: 000245

FECHA: 08 JUN 2018

PÁGINA 11 DE 36

**AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

de 1991, norma que como atrás quedó referido, había indicado que se otorgaba además de los enunciados para los niveles profesional, técnico, administrativo y operativo o sus equivalentes, precisando respecto de éstos últimos que a quienes le había sido otorgada dicha prima podían continuar con su disfrute hasta su retiro de la entidad o hasta que se produjera una de las circunstancias que generara su pérdida.

5). **Decreto 1335 de 1999**, "Por el cual se modifican los artículos 3 y 4 del Decreto 2164 de 1991" indicándose:

*"Art.3. Criterios para su asignación. Para tener derecho a Prima Técnica serán tenidos en cuenta alternativamente uno de los siguientes criterios, siempre y cuando, en el primer caso, excedan de los requisitos establecidos para el cargo que desempeñe el funcionario o empleado: a. Título de estudios de formación avanzada y 2). Evaluación del Desempeño.*

*Art. 4 de la Prima Técnica por formación avanzada y experiencia: Por este criterio tendrán derecho a prima técnica, los empleados que desempeñen en propiedad cargos de nivel ejecutivo, asesor o directivo que sean susceptibles de asignación de prima técnica de acuerdo al art. 7 de este decreto y que acrediten títulos de estudio de formación avanzada y experiencia altamente calificada en el ejercicio profesional, o en investigación técnica, en áreas relacionadas con las funciones propias del cargo durante un tiempo no menor a tres años [...]"*

Esta disposición reitera los criterios alternativos para la asignación de prima técnica consistentes en títulos de formación avanzada y evaluación del desempeño, y además limita su otorgamiento a los niveles ejecutivo, asesor o directivo.

6). **Decreto 1336 de 2003**, "Por el cual se modifica el Régimen de Prima Técnica para los empleados públicos del Estado", en el que se señala:

*"Art. 1. La prima técnica establecida en las disposiciones legales vigentes, solo podrá asignarse por cualquiera de los criterios existentes, a quienes estén nombrados con carácter permanente en los cargos del nivel Directivo, Jefes de Oficina Asesora y a los de Asesor cuyo empleo se encuentre adscrito a los despachos de los siguientes funcionarios: Ministro, Viceministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente y Director de Unidad Administrativa especial o sus equivalentes en los diferentes órganos y Ramas del Poder Público. [...]"*

*Artículo 4°. Aquellos empleados a quienes se les haya otorgado prima técnica, que desempeñen cargos de niveles diferentes a los señalados en el presente decreto o cargos de asesor en condiciones distintas a las establecidas en el artículo 1°, continuarán disfrutando de ella hasta su retiro del organismo o hasta que se cumplan las condiciones para su pérdida, consagradas en las normas vigentes al momento de su otorgamiento [...]"*

Estas normas nuevamente modifican los niveles para el otorgamiento de la prima técnica, autorizándola únicamente para los cargos de nivel Directivo, Jefes de Oficina Asesora y a los de Asesor, cuyo empleo se encuentre adscrito a los despachos del Ministro, Viceministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente y Director de Unidad Administrativa especial o sus equivalentes en los diferentes órganos y Ramas del Poder Público, pero además **reafirma la previsión relacionada**



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUTO N°: 000245

FECHA: 08 JUN 2018

PÁGINA 12 DE 36

AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

con la posibilidad de conservación de las primas técnicas otorgadas con anterioridad, precisando que continuarán disfrutándose hasta el retiro del funcionario de la entidad o hasta que se produzca una causal para su pérdida.

Bajo el anterior contexto normativo, en conclusión, puede afirmarse que el reconocimiento económico denominado “Prima Técnica” para los empleados del Estado y específicamente para los funcionarios de la **CÁMARA DE REPRESENTANTES**, ha tenido desarrollo en dos específicos aspectos, así:

1. **Criterios a evaluar para su asignación.** Los cuales fueron ampliándose, pues inicialmente se consideró como tales, la formación académica y la experiencia, incluyéndose posteriormente, la evaluación del desempeño.

2. **Niveles de los cargos respecto de los cuales se asigna.** En principio incluyeron todos los niveles jerárquicos, no obstante paulatinamente, se fue restringiendo el derecho a su otorgamiento respecto de los niveles Directivo, Jefe de Oficina Asesora y Asesores de Despacho. Fijando la transición normativa, una única excepción, consistente en la autorización de seguir disfrutando la prima técnica, respecto de los funcionarios a quienes se les hubiere reconocido la referida prestación, con anterioridad a la vigencia del Decreto 1336 de 2003, hasta su retiro de la entidad o hasta que se produjera alguna de las causales de pérdida establecidas.

En cuanto al alcance de la frase “**a quienes se le haya otorgado**”, contenida en la norma de transición, el Consejo de Estado, a través de su Sección Segunda, en sentencia de 10 de noviembre de 2010, puntualizó:

*“[...] Al respecto, debe precisarse que la expresión “otorgado” contenida en la norma transcrita no contrae los efectos del régimen de transición únicamente a quienes se encontraran disfrutando efectivamente de una prima técnica, a quienes tuviesen un acto expreso de reconocimiento de la misma, o a quienes hubiesen reclamado con anterioridad de su vigencia el derecho, como equivocadamente se ha entendido, sino que abarca a todos aquellos empleados que aun sin acto de reconocimiento o sin haber elevado la solicitud pertinente, hubiesen consolidado su derecho con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1724, el 11 de julio de 1997 de conformidad con la normatividad general o especial que les venía cobijando”. [Negrilla no original del texto]*

Efectuadas las anteriores precisiones normativas y jurisprudenciales, afirmamos que tienen derecho a Prima Técnica, con fundamento en las normas de transición, quienes cumplan los siguientes requisitos:

- Encontrarse inscrito como funcionario de carrera, en la Cámara de Representantes.
- Encontrarse en cualquier nivel jerárquico, antes de la expedición del Decreto 1724, que entró en vigencia el 11 de julio de 1997.
- No haber incurrido en causal de pérdida [obtener calificación inferior al 90% del total de puntos de la calificación, desde la fecha de adquisición del derecho que para los años 1996 a 2001

1176



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUTO N°: 000245

FECHA: 08 JUN 2018

PÁGINA 13 DE 36

**AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

correspondía a 630 de 700 posibles y para los años 2001, en adelante correspondía a 900 de 1000 posibles y/o 90 de 100 posibles] o cualquier otra de las indicadas en el artículo 11 del Decreto 2164 de 1991.

Así las cosas, hemos revisado los mencionados requisitos, respecto de cada uno de los trece (13) funcionarios objeto de la observación inicial, para lo cual registramos la información extraída de los documentos probatorios como se refleja en la siguiente tabla:



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUTO N°: 000245

FECHA: 08 JUN 2016

PÁGINA 14 DE 36

AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

No.	NOMBRE	C.C.	CARGO	FECHA DE INGRESO	SOLUC. PRIMA	RESOL. REAJUSTE	SENTENCIA	PRIMA APLICABLE AL CASO CONCRETO	DAÑO FISCAL	CERTIFICACION PAGO FACTOR SALARIAL	ANÁLISIS DE ESTE DESPACHO.
1	CAYO RICARDO BUITRAGO ESPEJO,	9.136.215	Transcriptor Grado 4.	Acta de Posesión 0063 de 20 de febrero de 1996 f. 951	1356 (f. 1001-1002) de 01 de junio de 2011. FUNDAMENTO APLICACIÓN DEL DECRETO 1724 DE 1997 ART. DE TRANSICIÓN.	NO SE REAJUSTÓ	Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 27 de agosto de 2015. Confirma sentencia que accedió a las pretensiones de la demandante LA NACIÓN. La decisión fue en el sentido de no tener derecho a la Prima Técnica. (Sentencias en CD. Y F.131 del expediente)	No le son aplicables los Decretos 1661 y 2164 de 1991 pues obtuvo una calificación menor a la exigida para haber adquirido y conservado el derecho. Existe sentencia que niega el derecho a la prima.	SI	Junio 2011 a Mayo 2016 (F. 1005 -1009).	CALIFICACIONES POR DEBAJO DEL PORCENTAJE ESTABLECIDO LEGALMENTE. HAY SENTENCIA EN FIRME QUE DECLARA LA NULIDAD DEL RECONOCIMIENTO.
2	HAROLD ALFONSO BUSTAMANTE SOTO	15.482.190	Operador de Sistemas, grado 4 y Almacenista sección suministros a partir de 20 de Enero de 2009.	Acta de Posesión de 2 de febrero de 1996 f. 1010	1354 (f. 1010-1011) de 01 de junio de 2011. FUNDAMENTO APLICACIÓN DEL DECRETO 1724 DE 1997 ART. DE TRANSICIÓN.	2377 de 23 de Agosto 2011 (F. 1126-1127)	Tribunal Adm Cundinamarca de 29 de julio de 2016. Confirma sentencia que declaró la nulidad de la resolución 1354 que reconoció y ordenó pago de prima técnica F.132 y c.d. sentencias en razón a que: 1. el juzgado 17 Administrativo de Cundinamarca en sentencia de 6 de octubre de 2010 que niega reconocimiento de prima técnica, y el Tribunal administrativo de cundinamarca el 20 de agosto de 2011 la confirma en razón a que la resolución, que reconocía la prima estaba siendo objeto de decisión.(Sentencia en CD)	Decreto 1336 DE 1999. No ocupaba el cargo del nivel exigido para hacerse acreedor a la Prima Técnica. No le son aplicables los Decretos 1661 y 2164 de 1991 pues obtuvo una calificación menor a la exigida para haber adquirido y conservado el derecho. Existe sentencia que niega el derecho a la prima.	SI	Junio 2011 a Nov. 2016 (F. 1014-1018).	HAY SENTENCIA EN FIRME QUE DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO DE RECONOCIMIENTO.
3	ROSALBA CARVAJAL PARRA	16.818.898	Operador de Sistemas Grado 4.	Acta de Posesión 0199 de 19 de julio de 1996 f. 1019 Y 1158	1355 (f. 1019 - 1020) de 01 junio 11. FUNDAMENTO APLICACIÓN DEL DECRETO 1724 DE 1997 ART. DE TRANSICIÓN		Consejo de Estado esta anulando recurso extraordinario de revisión de la sentencia proferida por el Tribunal administrativo de Cundinamarca el día 20 de enero de 2011, en el sentido de negar el derecho a la funcionaria.	Decreto 1336 DE 1999. No ocupaba el cargo del nivel exigido para hacerse acreedor a la Prima Técnica. No le son aplicables los Decretos 1661 y 2164 de 1991 pues obtuvo una calificación menor a la exigida para haber adquirido y conservado el derecho. Existe sentencia que niega el derecho a la prima.	SI	Junio 2011 a Jun 2017 (F. 1021 -1027).	CALIFICACIONES POR DEBAJO DEL PORCENTAJE ESTABLECIDO LEGALMENTE.
4	GIOVANNY DORLEY GONZALEZ COLORADO	13.167.211	Mensajero Grado 1	Acta de Posesión 0031 de 6 de febrero de 1996 (f. 1037 Y 1159)	1349 (f.1037-1038) de 01 junio 2011. FUNDAMENTO APLICACIÓN DEL DECRETO 1724 DE 1997 ART. DE TRANSICIÓN	2377 de 23 de Agosto 2011 (F. 1126-1127)	Juzgado 16 Administrativo de Bogotá, de junio 9 de 2016, la cual cursa recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Folio 131.	Decreto 1336 de 2003. No ocupaba el cargo del nivel exigido para hacerse acreedor a la Prima Técnica. No le son aplicables los Decretos 1661 y 2164 de 1991 pues obtuvo una calificación menor a la exigida para haber adquirido y conservado el derecho. Existe sentencia que niega el derecho a la prima.	SI	Junio 2011 a Mayo 2017 (F. 1041 -1045).	CALIFICACIONES POR DEBAJO DEL PORCENTAJE ESTABLECIDO LEGALMENTE.
5	DIANA GONZALEZ RODRIGUEZ	52.944.650	Mecanógrafa Grado 3	Acta de Posesión de 8 de febrero de 1996 (f. 1046)	1346 (f.1046-1047) de 01 jun 2011. F.121	2377 de 23 de Agosto 2011 (F. 1126-1127)	Tribunal Administrativo de Bogotá, declara impedimento para adelantar audiencia el 23 de noviembre de 2016.f. 132	Decreto 1336 DE 2003. No ocupaba el cargo del nivel exigido para hacerse acreedor a la Prima Técnica. No le son aplicables los Decretos 1661 y 2164 de 1991 pues obtuvo una calificación menor a la exigida para haber adquirido y conservado el derecho. Existe sentencia que niega el derecho a la prima.	SI	Junio 2011 a Mayo 2017 (F. 1050 -1054).	CALIFICACIONES POR DEBAJO DEL PORCENTAJE ESTABLECIDO LEGALMENTE.
6	NUMBERTO GUERRERO ACOSTA	17.053.898	Transcriptor Grado 4	Acta de Posesión de 8 de febrero de 1996(f. 1055).	1350 (f.1055-1056) de 01 jun 11		Juzgado Séptima Administrativo de Bogotá, falla a favor de la Entidad. (F.131)	Decreto 1336 DE 2003. No ocupaba el cargo del nivel exigido para hacerse acreedor a la Prima Técnica. No le son aplicables los Decretos 1661 y 2164 de 1991 pues obtuvo una calificación menor a la exigida para haber adquirido y conservado el derecho. Existe sentencia que niega el derecho a la prima.	SI	Junio 2011 a Mayo 2017 (F. 1059 -1063).	CALIFICACIONES POR DEBAJO DEL PORCENTAJE ESTABLECIDO LEGALMENTE.
7	ITA MARIA MARTINEZ LOZANO	39.570.903	Transcriptor a Grada 4.	Acta de Posesión de 12 de febrero de 1996 f. 1064	1361 (f.1064-1065) de 01 jun 11	2377 de 23 de Agosto 2011 (F. 1126-1127)	Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 22 de abril de 2015, dicta medida cautela de suspensión provisional y fue apelada ante el Consejo de Estado. (f.132)	Decreto 1336 DE 2003. No ocupaba el cargo del nivel exigido para hacerse acreedor a la Prima Técnica. No le son aplicables los Decretos 1661 y 2164 de 1991 pues obtuvo una calificación menor a la exigida para haber adquirido y conservado el derecho. Existe sentencia que niega el derecho a la prima.	SI	Junio 2011 a Mayo 2017 (F. 1064 -1072).	CALIFICACIONES POR DEBAJO DEL PORCENTAJE ESTABLECIDO LEGALMENTE.
8	LILIAM SEGURA TOROJO	55.156.364	Mecanógrafa Grado 3.	Acta de Posesión de 23 de febrero de 1996 (f. 1073).	1354 (f.1073-1074) de 01 jun 11	2377 de 23 de Agosto 2011 (F. 1126-1127)	Tribunal Administrativo de Cundinamarca, admitida el 21 de julio de 2014.	No cumplió los requisitos exigidos en el decreto de transición 1724 de 1997.	NO	Junio 2011 a Mayo 2017 (F. 1077 -1081).	CALIFICACIONES DENTRO DEL PORCENTAJE LEGAL
9	HERNANDEZ TRIUNFANTE RUIZ	52.072.466	Mecanógrafa Grado 3.	Acta de Posesión de 13 de febrero de 1996 f. 1082	1348 (f. 1082-1083) de 01 jun 11	2377 de 23 de Agosto 2011 (F. 1126-1127)	El Juzgado 10 Administrativo de Bogotá, el 4 de abril de 2014 declaró la nulidad de la resolución de reconocimiento de la prima. Sentencia confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 19 de febrero de 2015, (sentencia en CD)	No cumplió los requisitos exigidos en el decreto de transición 1724 de 1997.	SI	Junio 2011 a Junio 2015 (F. 1086 -1090).	HAY SENTENCIA EN FIRME QUE DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO DE RECONOCIMIENTO.
10	HERNANDO RODRIGUEZ CASTILLA	1.041.364	Operador de Equipo Grado 3.	Acta de Posesión de 7 de febrero de 1996 f. 1018	1358 (f.1118-1119) de 01 jun 11	2377 de 23 de Agosto 2011 (F. 1126-1127)	El Juzgado 16 Administrativo de Bogotá, declaró nula la resolución de reconocimiento de la prima, el sr. Rodríguez Castilla al momento del reconocimiento de la prima, estaba encausado como Auxiliar de Archivo y no en su calidad.	No cumplió los requisitos exigidos en el decreto de transición 1724 de 1997.	SI	Junio 2011 a Sept 2014 (F. 1021 -1024).	CALIFICACIONES POR DEBAJO DEL PORCENTAJE ESTABLECIDO LEGALMENTE.
11	CARMENZA CRUZ PARRA,	52.110.005	Mecanógrafa Sección registro y Control;	Acta de Posesión 0071. de 26 de febrero de 1996 (f. 1028)	1352 de junio 01 de 2011 (f.1028-1029)	2377 de 23 de Agosto 2011 (F. 1126-1127)	Fallo del 18 de marzo de 2011, el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, declaró la nulidad de la resolución que reconoce la prima técnica en razón a que se debía probar de cuerda a los Decretos 1724 de 1997 y 1336 de 2003 estar en situación de transición.	1661y 2164 de 1991. No cumplió con el requisito de la calificación en el año 1996	SI	Junio 2011 a Mayo 2015 (F. 1032 -1027).	HAY SENTENCIA EN FIRME QUE DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO DE RECONOCIMIENTO.
12	JOHN ABDENAGO VALOYES ASPRILLA	82.382.211	Mensajero de la Dirección Administrativa.	Acta de Posesión de 8 de febrero de 1996 f. 2091	1360 (f.1091-1092 DE 10. DE JUNIO DE 2013)		FALLO DE 30 DE JUNIO DE 2016 QUE ORDENA DECLARAR LA NULIDAD DEL ACTO DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES QUE NIEGA EL RECONOCIMIENTO DE LA PRIMA TÉCNICA. ORDENA RECONOCERLO Y PAGARLO.	Decreto 1661 y 2164 de 1991.	NO		RESOLUCION 1360 QUE ORDENA PAGO CON FUNDAMENTO EN SENTENCIA JUDICIAL.
13	ALVARO TORRES TELLEZ		Asistente Administrativo		688 (f. 25) de 17 de julio de 1998		Fallo de 30 DE JUNIO DE 2016 QUE ORDENA DECLARAR LA NULIDAD DEL ACTO DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES QUE NIEGA EL RECONOCIMIENTO DE LA PRIMA TÉCNICA. ORDENA RECONOCERLO Y PAGARLO.	Decreto 1661 y 2164 de 1991.	SI	Enero 2003 a Mayo 2017 (f. 1109-1117)	CALIFICACIONES POR DEBAJO DEL PORCENTAJE ESTABLECIDO LEGALMENTE







CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUTO N°: 000245

FECHA: 08 JUN 2018

PÁGINA 16 DE 36

AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

El resultado del anterior análisis es el siguiente:

NÚMERO	NOMBRE	DANO FISCAL
1	CAYO RICARDO BUITRAGO ESPEJO,	SI
2	HAROLD ALFONSO BUSTAMENTE SOTO	SI
3	GIOVANNY DURLEY GONZALEZ COLORADO	SI
4	DIANA GONZALEZ RODRIGUEZ	SI
5	HUMBERTO GUERRERO ACOSTA	SI
6	ITA MARIA MARTINEZ LOZANO	SI
7	AMANDA TINJACA RUIZ	SI
8	HERNANDO RODRIGUEZ CASTILLA	SI
9	CARMENZA CRUZ PARRA,	SI
10	ALVARO TORRES TELLEZ	SI
11	ROSALBA CARVAJAL PARRA	SI
12	LUZ DARY SEGURA CORDON	NO
13	JOHN ABDENAGO VALOVES ASPRILLA	NO

Concluyéndose respecto de la anterior información lo siguiente:

1. Se ordenó el reconocimiento y pago de prima técnica por evaluación de desempeño a favor de los funcionarios: CAYO RICARDO BUITRAGO ESPEJO, ROSALBA CARVAJAL PARRA; GIOVANNY DURLEY GONZALEZ COLORADO; DIANA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, HUMBERTO GUERRERO ACOSTA, HERNANDO RODRÍGUEZ CASTILLA e ITA MARÍA MARTÍNEZ LOZANO, sin que tuvieran derecho a ella.

En efecto, si bien a la luz de la regulación que establece el régimen de transición, se preveía la posibilidad de realizar tal reconocimiento a quienes sin tener en cuenta el nivel jerárquico, para la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 11 de julio de 1997, tuvieran un derecho consolidado, es decir, que antes del 11 de julio de 1997, se encontraran inscritos como funcionarios de carrera de la Cámara de Representantes y que el beneficiario no hubiere obtenido una calificación de servicios por desempeño inferior al 90%, desde la fecha de dicha consolidación hasta aquella del efectivo reconocimiento, es decir, vigencia 2011.

No obstante, la evidencia probatoria da cuenta que los citados funcionarios obtuvieron calificaciones por debajo del porcentaje establecido.

2. En relación con HAROLD ALFONSO BUSTAMENTE SOTO, del material probatorio analizado se desprende que de conformidad con la regulación mediante la cual se estableció el régimen de transición descrito en el numeral anterior, dichos requisitos al parecer confluían respecto del funcionario.

Sin embargo, no puede dejarse de lado la decisión proferida por la Sección Segunda, Subsección "C" del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 29 de julio de 2016, en el sentido de confirmar la sentencia proferida por el Juzgado once (11) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, D.C., de 06 de julio de 2015, mediante la cual se negó la pretensión propuesta, atendiendo a que se consideró que había sido un tema debatido y resuelto por ese mismo Tribunal en providencia de 20 de agosto de 2011, negando el reconocimiento del derecho a devengar prima técnica, la cual señala:



1718



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUTO N°: 000245

FECHA: 08 JUN 2018

PÁGINA 17 DE 36

**AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

*"Por consiguiente, no ha [sic] lugar a estudiar si al señor Bustamante Soto le asiste derecho a devengar la prima técnica por evaluación de desempeño, pues se trata de un tema que ya fue debatido y resuelto por los jueces de instancia [...]"*

*De otra parte, tenemos que previo a que se expidiera el fallo de segunda instancia, y estando en discusión el derecho reclamado en vía judicial por el señor Harold Bustamante Soto, El Director Administrativo de la Cámara de Representantes expidió la Resolución No. 1364 de 01 de junio de 2011, por la cual se reconoció y ordenó el pago de prima técnica a dicho empleado público, desconociendo que al estar vinculada la entidad como parte demandada en litigio, lo procedente era esperar a que la jurisdicción resolviera sobre la controversia [...]"*

Así, por ahora se considerará que dicho reconocimiento y pago se realizó de manera irregular, ello sin perjuicio a que en desarrollo de la actuación que se adelantará, se realice el esfuerzo probatorio pertinente a fin de allegar las calificaciones de desempeño que obtuvo desde el 02 de febrero de 1996 al 01 de junio de 2011, fecha en la cual se expidió la Resolución No. 1354, mediante la cual se le otorgó a su favor la prima técnica por parte de la **CAMARA DE REPRESENTANTES**, a fin de establecer si en tales periodos el beneficiario obtuvo o no una calificación de servicios inferior al 90% desde la fecha de dicha consolidación, hasta aquella del efectivo reconocimiento.

3. En lo relacionado con CARMENZA CRUZ PARRA, es del caso señalar que revisado el material probatorio allegado como soporte de la actuación, no registra la evaluación de desempeño correspondiente al periodo 1996.

No obstante, se determina que la citada funcionaria de acuerdo con la decisión proferida por la Sección Segunda, Subsección "E" del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 08 de marzo de 2016, que declaró infundado el Recurso de Revisión incoado en contra de la sentencia proferida por el Juzgado segundo (2o.) Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, mediante la cual se negó la pretensión de reconocimiento y pago de prima técnica por evaluación de desempeño, obtuvo para el citado periodo una calificación de servicios inferior al 90%, lo que implica que no tenía derecho a dicho reconocimiento, tal y como allí se indicó, veamos:

*"[...] Del certificado en mención, se extrae con meridiana claridad que, la negativa a conceder la prima técnica por evaluación de desempeño, obedeció al hecho que, para el año 1996, la calificación de servicios de la demandante, estuvo por debajo del 90%, límite máximo requerido para acceder a ese estímulo económico, de suerte que ante dicha circunstancia, no alcanzó a consolidar su derecho en vigencia del régimen anterior [...]"*

Por lo anterior, el Despacho considera pertinente que en desarrollo de la actuación se allegue la información pertinente a fin de verificar la calificación correspondiente al año 1996, como en efecto se ordenará en la parte resolutive del presente proveído.

4. Respecto de ALVARO TORRES TELLEZ, sea conveniente precisar que al igual que las personas relacionadas en el numeral 1, se realizó el reconocimiento y pago de prima técnica a su favor sin que tuviera derecho a ella, como quiera que si bien se

**AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

otorgó bajo una modalidad diferente, la que hubiera aplicado de conformidad con la regulación mediante la cual se estableció el régimen de transición, preveía la posibilidad de realizar tal reconocimiento a quienes sin tener en cuenta el nivel jerárquico, para la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 11 de julio de 1997, tuvieran un derecho consolidado.

Ello implica que antes del citado 11 de julio de 1997, se encontraran inscritos como funcionarios de carrera de la Cámara de Representantes y que el beneficiario no hubiere obtenido una calificación de servicios inferior al 90% desde la fecha de dicha consolidación hasta aquella del efectivo reconocimiento.

En el caso de este funcionario tampoco se encontraba consolidada, afirmación soportada en la evidencia probatoria según la cual aquel obtuvo calificaciones por debajo del porcentaje establecido para los periodos 96, 99 y 02, lo que implica que el reconocimiento y pago ordenado por la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes mediante Resolución No. 686 de 17 de julio de 1998, era improcedente.

5. En cuanto hace referencia a AMANDA TINJACA RUIZ, se tiene que de acuerdo con el contenido de la decisión proferida por la Sección Segunda, Subsección "A" del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 19 de febrero de 2015, en el sentido de confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Veinte (20) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, de 04 de abril de 2014, por medio de la cual se declaró la nulidad de los actos administrativos que ordenaron el reconocimiento y pago de prima técnica a su favor.

Es notorio que el criterio jurídico que se tuvo en cuenta para adoptar dicha decisión se orientó a sostener que la citada no ocupaba un cargo del nivel directivo, ejecutivo o asesor, en razón a que se desempeñaba como "mecnógrafa grado 03" y que probatoriamente no se había acreditado encontrarse acogida bajo el régimen de transición.

Por lo anterior, se considerará que dicho reconocimiento y pago se realizó de manera irregular, ello sin perjuicio a que en desarrollo de la actuación que se adelantará, se realice el esfuerzo probatorio pertinente a fin de allegar las calificaciones de desempeño que obtuvo desde el 13 de febrero de 1996 al 01 de junio de 2011, fecha en la que se expidió la Resolución No.1348, mediante la cual se le otorgó a su favor la prima técnica por parte de la **CAMARA DE REPRESENTANTES**, a fin de establecer si en tales periodos la beneficiaria, obtuvo o no una calificación de servicios inferior al 90% desde la fecha de dicha consolidación, hasta aquella del efectivo reconocimiento.

6. Por último, se determina en relación con LUZ DARY SEGURA CORDON y JOHN ABDENAGO VALOYES ASPRILLA, que la primera de los nombrados, conforme lo registran las evaluaciones de desempeño allegadas al informativo, éstas se encuentran por encima del límite autorizado para considerarse cobijada por el



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUTO N°: 000245

FECHA: 08 JUN 2018

PÁGINA 19 DE 36

**AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

régimen de transición al que atrás se ha aludido, lo que por ende implica que el reconocimiento y pago de prima técnica efectuado se realizó conforme a la normativa legal establecida, y por tanto, no podría predicarse que el mismo, genere detrimento patrimonial alguno.

Encontrándose en idéntica situación VALOYES ASPRILLA, dado que de acuerdo con la decisión adoptada mediante Fallo de 14 de febrero de 2011 proferido por el Juzgado Quinto (5o.) Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, se ordenó declarar la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se negó el reconocimiento y pago de prima técnica, en lo concerniente al citado, condenando a la Corporación a pagar tal prestación.

Efectuadas las precisiones anteriores, con miras a establecer el valor estimado del detrimento patrimonial que se predica que afectó los intereses de la **CÁMARA DE REPRESENTANTES**, se decretó y practicó en el transcurso de la indagación preliminar la correspondiente evaluación técnica para que un contador público de la Contraloría General de la República, verificara los cálculos respecto de los pagos efectuados a favor de los mencionados funcionarios.

El respectivo Informe de Apoyo Técnico, señaló:

*"[...] 2. Para la verificación de la información reportada por parte de la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, se tuvo en cuenta lo siguiente: Cargos en los cuales fueron nombrados los funcionarios de la relación y en los cuales le fue concedida prima técnica; Resoluciones mediante las cuales se concedió prima técnica a los funcionarios antes relacionados; Porcentaje de reconocimiento de prima técnica para cada uno de ellos; Asignaciones básicas mensuales de los funcionarios sobre los cuales se reconoció prima técnica; Acto administrativo de reajuste sobre algunas primas técnicas y fechas de asignación de la prima técnica o cese de la misma/ corte a 31 de mayo de 2017, según aplique, es decir, algunos de los actos administrativos por los cuales se concedió prima técnica se encuentran demandados y por ello han cesado sus pagos. En los casos en que no sucede lo anotado, se tiene como corte del pago, el 31 de mayo de 2017 [...]"*

*"3. Los cálculos se verificaron partiendo de las asignaciones mensuales reportadas por la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes. Seguidamente, se procedió a aplicar los respectivos porcentajes reconocidos para cada funcionario.*

*Hecha la verificación se tiene que los datos consignados mes a mes para los periodos de pago de cada uno de los funcionarios, y totalizados por año para la relación de funcionarios, se encuentran registrados en debida forma. Esto es, los montos calculados a los funcionarios de la relación inicial, corresponden a:*



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUTO N°: 000245

FECHA: 08 JUN 2018

PÁGINA 20 DE 36

AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

NÚMERO	NOMBRE FUNCIONARIO	VALOR PAGADO PRIMA TÉCNICA
1	CAYO RICARDO BUITRAGO ESPEJO,	\$59.574.724
2	HAROLD ALFONSO BUSTAMENTE SOTO	\$65.625.864
3	ROSALBA CARVAJAL PARRA	\$85.912.106
4	CARMENZA CRUZ PARRA	\$58.517.255
5	GIOVANNY DURLEY GONZALEZ COLORADO	\$76.545.590
6	DIANA GONZALEZ RODRÍGUEZ	\$101.564.244
7	HUMBERTO GUERRERO ACOSTA	\$71.920.712
8	ITA MARÍA MARTINEZ LOZANO	\$98.408.614
9	LUZ DARY SEGURA CORDON	\$71.423.354
10	AMANDA TINJACA RUÍZ	\$45.668.340
11	JOHN ABDENAGO VALOYES ASPRILLA	\$51.497.129
12	ALVARO TORRES TELLEZ	\$195.113.831
13	HERNANDO RODRÍGUEZ CASTILLA	\$37.193.694
TOTAL		\$1.018.971.457

[...]"

Así entonces, tomaremos los montos reportados en el Informe de Apoyo técnico para funcionarios que a continuación se relacionan, respecto de los cuales se predica le fueron reconocidas y pagadas sumas por concepto de prima técnica sin que legalmente tuvieran derecho a ella, veamos:

No.	NOMBRE	VALOR PAGADO PRIMA TÉCNICA
1	CAYO RICARDO BUITRAGO ESPEJO,	59.574.724
2	HAROLD ALFONSO BUSTAMENTE SOTO	65.625.864
3	AMANDA TINJACA RUÍZ [pendiente confirmar]	45.668.340
4	CARMENZA CRUZ PARRA	58.517.255
5	GIOVANNY DURLEY GONZALEZ COLORADO	76.545.590
6	DIANA GONZALEZ RODRÍGUEZ	101.564.244
7	HUMBERTO GUERRERO ACOSTA	71.920.712
8	HERNANDO RODRIGUEZ CASTILLA	37.193.694
9	ITA MARÍA MARTINEZ LOZAN	98.408.614
10	ALVARO TORRES TELLEZ	195.113.831
11	ROSALBA CARVAJAL PARRA	85.912.106
VALOR TOTAL		\$896.044.974

De esta forma, el monto reportado en el Informe de Apoyo Técnico por la funcionaria LUISA FERNANDA MIRANDA SOTO, profesional adscrito a este organismo de vigilancia y control, acerca del cálculo final por pagos de prima técnica a los funcionarios citados, se complementará en trámite posterior, a fin de establecer el valor pagado desde la fecha de corte que se fijó en el informe técnico practicado en desarrollo de la actuación, es decir, 31 de mayo de 2017 a la actualidad.

A lo anterior se incluirá respecto de cada uno de los pagos efectuados, las sumas liquidadas en las que la prima técnica concedida y pagada se tuvo como factor salarial desde la fecha en la que se inició el pago de aquella a la actualidad, a fin de cuantificar la magnitud no indexada del daño acaecido por el que ha de reclamar el Estado mediante el presente proceso de responsabilidad fiscal, para que sea resarcido el

1180

	AUTO N°: 000245
	FECHA: 08 JUN 2018
	PÁGINA 21 DE 36
	AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

patrimonio público por las personas que culminada la actuación sean declaradas responsables fiscales<sup>1</sup>.

Daño que inicialmente se cuantifica en la suma no indexada de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$896.044.974)**.

**B. SOBRE LA VIGENCIA DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL:**

Por otro lado, es de mencionar que la misma Ley 610 de 2000, fija el término de **caducidad** para iniciar la acción de responsabilidad fiscal, en cinco (5) años transcurridos desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público:

*“Artículo 9°. Caducidad y prescripción. La acción fiscal caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Este término empezará a contarse para los hechos o actos instantáneos desde el día de su realización, y para los complejos, de tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado desde el último hecho o acto. [...]”*

Para el caso bajo examen, la orden impartida por la autoridad competente, contenida en los actos administrativos que reconocieron y pagaron a los funcionarios vinculados en propiedad enunciados en la tabla anterior, de una suma de dinero a título de prima técnica, constituye el hecho que generó menoscabo en el patrimonio público en tanto se trata de un acto jurídico de carácter complejo, el cual se materializa con los pagos mensuales [tracto sucesivo y continuado], por lo que conforme el contenido de la norma en cita, ha de afirmarse que para efectos de contabilizar el aludido fenómeno, debemos tener en cuenta el último hecho o acto, que para el caso se reportó respecto de cada uno de los beneficiarios, como se indica en el cuadro siguiente:

No.	NOMBRE FUNCIONARIO	PERIODO ULTIMO CERTIFICADO DE PAGOS	FOLIOS
1	CAYO RICARDO BUITRAGO ESPEJO,	may-16	1005-1008
2	HAROLO ALFONSO BUSTAMENTE SOTO	nov-16	1014-1017
3	AMANDA TINJACA RUÍZ	jun-15	1086-1088
4	CARMENZA CRUZ PARRA	feb-15	1032-1034
5	GIOVANNY DURLEY GONZALEZ COLORADO	may-17	1041-1044
6	DIANA GONZALEZ RODRÍGUEZ	may-17	1050-1053
7	HUMBERTO GUERRERO ACOSTA	may-17	1059-1062
8	HERNANDO RODRÍGUEZ CASTILLA	sep-14	1122-1124
9	ITA MARIA MARTINEZ LOZANO	may-17	1068-1071
10	ALVARO TORRES TELLEZ	may-17	1109-1117
11	ROSALBA CARVAJAL PARRA	jun-17	1023-1027

Con base en el reporte de fechas antes señaladas se advierte que ningún caso han transcurrido cinco (05) años desde el último pago reportado, fechas que además,

<sup>1</sup> Ley 610 de 2000: Artículo 1°. Definición. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUTO N°: 000245

FECHA: 08 JUN 2018

PÁGINA 22 DE 36

**AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

podrían variar en la medida que, luego del corte que fijó el informe técnico, es decir el 31 de mayo de 2017, se hayan seguido generando pagos por dichos conceptos, aspecto que como atrás se anunció, será objeto de averiguación en desarrollo de la actuación que se ordenará adelantar.

**C. DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES:**

Ahora bien, para responder por el resarcimiento del patrimonio estatal afectado, deben vincularse las personas respecto de las cuales se tengan serios indicios de que en ejercicio de gestión fiscal o con ocasión de aquella, hayan posiblemente desplegado conductas calificadas con dolo o culpa grave.

Frente al caso concreto, de acuerdo con el material probatorio hasta ahora allegado a la actuación, se infiere que podrían tener comprometida su responsabilidad quienes dadas sus atribuciones funcionales y legales, profirieron los actos que ordenaron el reconocimiento y pago de prima técnica a once (11) funcionarios adscritos a la **CÁMARA DE REPRESENTANTES**, estos son: CAYO RICARDO BUITRAGO ESPEJO, HAROLD ALFONSO BUSTAMENTE SOTO; AMANDA TINJACA RUÍZ, CARMENZA CRUZ PARRA, GIOVANNY DURLEY GONZALEZ COLORADO, DIANA GONZALEZ RODRÍGUEZ, HUMBERTO GUERRERO ACOSTA, HERNANDO RODRÍGUEZ CASTILLA, ITA MARÍA MARTINEZ LOZANO, ROSALBA CARVAJAL PARRA y ALVARO TORRES TELLEZ.

Así, se encuentra que las Resoluciones Nos. 1356, 1354, 1348, 1352, 1349, 1346, 1350, 1358, 1361 y 1355 de fecha 01 de junio de 2011 y No. 0686 de 17 de julio de 1998 que reconocieron y ordenaron el pago de prima técnica a los funcionarios anteriormente enunciados, fueron actos administrativos de gestión de recursos públicos, expedidos por JAIRO JARAMILLO MATIZ, en su condición de Director Administrativo de la Cámara de Representantes, con el visto bueno de DIANA ROJAS BRÍÑEZ, Jefe de la División de Personal, BLANCA EMMA SALAZAR, en su condición de Jefe de la División Financiera, CARLOS ALBERTO FLOREZ ROJAS, Jefe de la División Jurídica y JESÚS ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO, en su condición de Secretario General, para la época de los hechos.

Sobre el particular, resulta pertinente precisar el concepto de gestión fiscal conforme a la definición establecida en la misma Ley 610 de 2000 "por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías", veamos:

*"Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de **actividades económicas, jurídicas** y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales."* (Destaca el Despacho)

**AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

Según la documentación obrante en el expediente en la unidad de almacenamiento allegado CD obrante a folio 9, se determina que JAIRO JARAMILLO MATIZ ocupó el cargo de Director Administrativo de la **CÁMARA DE REPRESENTANTES** entre el 06 de agosto de 2010 y el 11 de octubre de 2011, y tenía a su cargo las funciones descritas en el parágrafo 2º del artículo 382 de la Ley 5ª de 1992, así:

*"El orden administrativo, la competencia para dirigir licitaciones y celebrar contratos, ordenar el gasto y ejercer la representación legal de la Cámara de Representantes en materia administrativa y contratación estatal, corresponden al Director Administrativo".*

Por otra parte, el artículo 18 de la Resolución No. MD 1095 de 24 de junio de 2010, "Por la cual se modifica la Resolución N° MD 3155 de 2008, mediante la cual se adopta el Manual de Funciones y Requisitos Mínimos para todos los empleos de la planta de Personal, y se reglamenta la clasificación de los empleos según el nivel jerárquico en la Honorable Cámara de Representantes", identifica las funciones generales para los cargos de la Cámara de Representantes, y señala las siguientes para el cargo de Director Administrativo:

[...]

1. Dirigir y organizar las funciones administrativas de la Cámara de Representantes.
2. Velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias al interior de la Corporación.  
[...]
4. Ordenar el gasto y ejercer la Representación Legal de la Cámara de Representantes en materia administrativa y contratación estatal. [...]
8. Realizar las modificaciones a la organización administrativa, la planta de personal, y el sistema de la remuneración de la Cámara de Representantes." (Ver folio 115 del expediente).

Se observa entonces de la normativa anotada, que JAIRO JARAMILLO MATIZ, en su condición de Director Administrativo de la Cámara de Representantes, tuvo a su cargo la administración de los recursos tanto humano, como financiero, material y técnico de la entidad, para el funcionamiento y organización del sistema de remuneración de la Corporación, así como la ordenación del gasto y que en tal virtud expidió junto con otros funcionarios, las Resoluciones Nos. 1356, 1354, 1348, 1352, 1349, 1346, 1350, 1358, 1361 y 1355 de fecha 01 de junio de 2011, mediante las cuales se ordenó el reconocimiento y pago de prima técnica por evaluación de desempeño sin tener en cuenta que las personas citadas no tenían derecho a percibir tal asignación dado que la evaluación del desempeño se encontraba por debajo del 90% .

En relación con DIANA ROJAS BRÍÑEZ, según certificación expedida por la Cámara de Representantes obrante en el expediente en la unidad de almacenamiento allegado CD obrante a folio 9 del expediente, se tiene que aquella se desempeñó como Jefe de la División de Personal de la Cámara de Representantes en el período comprendido entre el 1º de febrero de 2011 al 25 de octubre de 2014, y en virtud de lo establecido en el artículo 18 de la ya referida Resolución No. MD 1095 de 2010, le estaban atribuidas entre otras, las siguientes funciones:

[...]





CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUTO N°: 000245

FECHA: 08 JUN 2018

PÁGINA 24 DE 36

**AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

1. Asesorar a la Mesa Directiva y a la Dirección Administrativa elaborando, adoptando y ejecutando las políticas de personal y recurso humano de la entidad.
2. Asesorar a la Mesa Directiva y a la Dirección Administrativa en la proyección de resoluciones y demás actos administrativos, referentes a novedades de personal, (nombramientos, vacaciones, licencias, insubsistencias, renunciaciones, permisos, judicaturas).
3. Velar por el cumplimiento y aplicación de las normas y demás disposiciones de administración de personal, gerenciando el recurso humano de la Corporación.
4. Organizar y coordinar los procesos de carrera administrativa, selección, clasificación, registro, y desarrollo del personal al servicio de la Cámara de Representantes.
5. Ejercer la coordinación para elaborar el cuadro de situaciones administrativas de las novedades de personal de la corporación.
6. Coordinar la selección, el entrenamiento, y capacitación de personal.
7. Asesorar a las directivas, a los Honorables Representantes y a los funcionarios en general, con relación a las novedades de personal y al tema de recurso humano en general. [...]"

De lo anterior se advierte que DIANA ROJAS BRIÑEZ, en su condición de Jefe de la División de Personal de la Cámara de Representantes, conceptuó favorablemente la asignación de la prima técnica de los funcionarios citados y además suscribió conjuntamente con el Director Administrativo y otros funcionarios, las Resoluciones Nos. 1356, 1354, 1348, 1352, 1349, 1346, 1350, 1358, 1361 y 1355 de fecha 01 de junio de 2011, mediante las cuales se ordenó el reconocimiento y pago de prima técnica por evaluación de desempeño sin tener en cuenta que los citados no tenían derecho a percibir tal asignación dado que la evaluación del desempeño se encontraba por debajo del 90%.

BLANCA EMMA SALAZAR BONILLA, en su condición de Jefe de la División Financiera de la Cámara de Representantes, en el periodo comprendido entre el 01 de septiembre de 2010 y el 27 de marzo de 2015, según certificación anexa a folios 138 y 143 a 146 del expediente, y que conforme el artículo 18 de la ya referida Resolución No. MD 1095 de 2010, le estaban atribuidas entre otras, las siguientes funciones:

*"1. Dirigir, coordinar, controlar y supervisar la ejecución presupuestal de los recursos financieros de la Corporación. ..."*

De lo anterior se advierte que BLANCA EMMA SALAZAR BONILLA, en su condición de Jefe de la División Financiera de la Cámara de Representantes, conceptuó favorablemente la asignación de la prima técnica a los funcionarios citados y además suscribió conjuntamente con el Director Administrativo las resoluciones suscribió conjuntamente con el Director Administrativo y otros funcionarios, las Resoluciones Nos. 1356, 1354, 1348, 1352, 1349, 1346, 1350, 1358, 1361 y 1355 de fecha 01 de junio de 2011, mediante las cuales se ordenó el reconocimiento y pago de prima técnica por evaluación de desempeño sin tener en cuenta que los citados no tenían derecho a percibir tal asignación dado que la evaluación del desempeño se encontraba por debajo del 90% .

CARLOS ALBERTO FLÓREZ ROJAS se desempeñó como Jefe de la División Jurídica de la Cámara de Representantes en el período comprendido entre el 01 de octubre de 2010 y el 31 de octubre de 2011 según certificación anexa. [Cfr. folio 85 del expediente]





AUTO N°: 000245

FECHA: 08 JUN 2018

PÁGINA 25 DE 36

AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

El artículo 18 de la Resolución No. MD 1095 de 2010, señala como funciones del Jefe de la División Jurídica de la Cámara de Representes, las siguientes:

[...]

1. Asesorar en cuanto a aspectos legales se refiere, a la Mesa Directiva y al Directiva y al Director Administrativo.
2. Estudiar providencias y resoluciones.
3. Estudiar expedientes para resolver consultas y solicitudes [...]"

Se encuentra que la suscripción conjunta con el Director Administrativo, que hizo CARLOS ALBERTO FLÓREZ ROJAS, en su condición de Jefe de División Jurídica de la Cámara de Representantes, dio visto bueno a las resoluciones suscribió conjuntamente con el Director Administrativo y otros funcionarios las Resoluciones Nos. 1356, 1354, 1348, 1352, 1349, 1346, 1350, 1358, 1361 y 1355 de fecha 01 de junio de 2011, mediante las cuales se ordenó el reconocimiento y pago de prima técnica por evaluación de desempeño sin tener en cuenta que los citados no tenían derecho a percibir tal asignación dado que la evaluación del desempeño se encontraba por debajo del 90%.

Por último, es de mencionar que, a juicio del Despacho, por ahora no procede la vinculación de JESÚS ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO, Secretario General de la Cámara de Representantes, pues si bien suscribió conjuntamente con el Director Administrativo y otros funcionarios las Resoluciones Nos. 1356, 1354, 1348, 1352, 1349, 1346, 1350, 1358, 1361 y 1355 de fecha 01 de junio de 2011, mediante las cuales se ordenó el reconocimiento y pago de prima técnica por evaluación de desempeño objeto de este análisis, las funciones establecidas en el artículo 47 de la Ley 5ª de 1992 a él asignadas, están orientadas a coordinar las labores legislativas de la corporación y por tanto, la suscripción que hizo del documento no determina la procedencia de su ejecución al carecer de competencia. [Cfr. folios 135 a 137 del expediente].

Para el evento de la responsabilidad que pueda derivarse del daño fiscal que se predica originado en el reconocimiento y pago de la prima técnica ordenada a favor del funcionario ALVARO TORRES TELLEZ, en virtud de la expedición de la Resolución No. 0686 de 17 de julio de 1998 suscrita por **CARLOS ANTONIO ARDILA BALLESTEROS**, en su condición de Presidente, **ANTENOR DURÁN CARRILLO**, en su condición de Vicepresidente y **DIEGO VIVAS TAFUR**, en condición de Secretario General de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, de conformidad con lo ordenado en el artículo 9 de la Ley 52 de 1978, quienes para la época de los hechos, ocupaban los mencionados cargos se tiene que:

Según certificación expedida por la Cámara de Representantes [Cfr. folios 120 a 126 del expediente], **CARLOS ANTONIO ARDILA BALLESTEROS**, fungió como Representante a la Cámara por el Departamento de Santander, en los períodos constitucionales 1982-1986, 1990-1994, 1991-1994 y 1994-1998, no obstante lo anterior, resulta imprecisa la aludida información, la cual se habrá de allegar en desarrollo de la presente actuación, como en efecto se ordenará en la parte resolutive de la presente



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUTO N°: 000245

FECHA: 08 JUN 2018

PÁGINA 26 DE 36

**AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

providencia, habida consideración que aquella no señala el periodo durante el cual el citado ejerció como Presidente de la Mesa Directiva de dicha Corporación.

No obstante, corresponde señalar que, como se evidencia a folio 1101<sup>2</sup>, la Resolución 0686 del 17 de julio de 1998 por medio de la cual se reconoció y ordenó pagar la prima técnica, entre otros servidores, a ÁLVARO TORRES TÉLLEZ, se encuentra suscrita por CARLOS ARDILA BALLESTEROS en calidad de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, actuación realizada con fundamento en las facultades concedidas por la normatividad para ese entonces vigente, esto es, el artículo 9º de la Ley 52 de 1978 creador de la prima técnica, y particularmente el artículo 14, inciso 4º, que precisaba: "Así mismo, mientras no se haga la designación de los Directores Administrativos, las Mesas Directivas ejercerán provisionalmente las funciones de administración de personal, excepto la de nombrar nuevos empleados."

Debe decirse que si bien se otorgó bajo una modalidad diferente a la de evaluación del desempeño, la que hubiera aplicado de conformidad con la regulación mediante la cual se estableció el régimen de transición, preveía la posibilidad de realizar tal reconocimiento a quienes sin tener en cuenta el nivel jerárquico, para la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 11 de julio de 1997, tuvieran un derecho consolidado, es decir, que antes del 11 de julio de 1997, se encontraran inscritos como funcionarios de carrera de la Cámara de Representantes y que el beneficiario no hubiere obtenido una calificación de servicios inferior al 90% desde la fecha de dicha consolidación, hasta aquella del efectivo reconocimiento.

En este caso tampoco se encontraba consolidada, toda vez que las pruebas demuestran que aquél obtuvo calificaciones por debajo del porcentaje establecido para los periodos 96, 99 y 02, lo que implica que el reconocimiento y pago, ordenado por la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, mediante la citada Resolución No. 686 de 17 de julio de 1998, resultaba improcedente.

En cuanto tiene que ver con los demás miembros de la Mesa Directiva que suscribieron el citado acto administrativo, advierte el Despacho que dentro del informativo contentivo de la actuación, no se allegó medio probatorio alguno que permita conocer los datos de identificación de ANTENOR DURÁN CARRILLO y DIEGO VIVAS TAFUR, quienes suscribieron el acto administrativo de asignación de la prima técnica cuestionada, en su condición de Segundo Vicepresidente y Secretario General de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, respectivamente.

Por lo expuesto, su vinculación se realizará con posterioridad, una vez se logre obtener la citada información a fin de surtir el trámite de notificación correspondiente y así, garantizar su derecho de defensa y contradicción, para lo cual, en la parte resolutive de esta providencia se ordenará allegar la prueba documental pertinente, junto con aquella que permita establecer el periodo durante el cual los citados ejercieron los aludidos cargos de la Mesa Directiva de dicha Corporación y administrativamente

<sup>2</sup> Carpeta principal N° 6.

**AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

cuales eran sus funciones en relación con el reconocimiento y pago de prima técnica, realizado a favor de ALVARO TORRES TELLEZ.

Ello sin perjuicio de que con posterioridad se ordenen nuevas vinculaciones en desarrollo de la actuación, de probarse que, se encuentre comprometida la responsabilidad fiscal de otros funcionarios y/o particulares que hayan actuado en ejercicio de la gestión fiscal u ocasión de aquella, y con su conducta hayan ocasionado o contribuido con el daño que se reputa causado.

Así, conforme lo indica el artículo 40 de la Ley 610 de 2000, se ordenará la apertura de Proceso de Responsabilidad Fiscal, cuando de la Indagación Preliminar, de la queja, del dictamen o del ejercicio de cualquier acción de vigilancia o sistema de control, se encuentre establecida la existencia de un daño patrimonial al Estado e indicios serios sobre los posibles autores del mismo, en el caso presente procede entonces ordenar la apertura de proceso de responsabilidad fiscal, dado que probatoriamente se encuentran soportados los presupuestos que exige el artículo precitado:

Un daño al patrimonio público, estimado en la suma inicial no indexada de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$896.044.974)**, por haberse ordenado y pagado a favor de funcionarios vinculados a la Cámara de Representantes para la época de los hechos, prima técnica, sin tener derecho a tal reconocimiento económico según las normas que regulan la materia y se cuenta con Indicios serios sobre la autoría del mismo en cabeza de JAIRO JARAMILLO MATIZ, en su condición de Director Administrativo de la Cámara de Representantes, DIANA ROJAS BRÍÑEZ, Jefe de la División de Personal, BLANCA EMMA SALAZAR, en su condición de Jefe de la División Financiera y CARLOS ALBERTO FLOREZ ROJAS, como Jefe de la División Jurídica, todos de la Cámara de Representantes, para la época de los hechos y, CARLOS ANTONIO ARDILA BALLESTEROS como Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes en relación con el reconocimiento y pago de prima técnica, realizado a favor de ALVARO TORRES TELLEZ, sin que al parecer tuviera derecho a ella.

Así entonces, el presente proceso investigará y resolverá sobre la existencia o no de responsabilidad fiscal en relación con los vinculados, para que en caso de declarárseles responsables fiscales, se les exija el resarcimiento del daño producido sobre el patrimonio público como consecuencia de la inobservancia de los principios orientadores de la gestión fiscal en particular y de la función administrativa en general. Por esta vía, entonces, se puede concretar que mediante el Proceso de Responsabilidad Fiscal se valora (i) la existencia de un daño al patrimonio público, (ii) el ejercicio de la gestión fiscal irregular a título de culpa grave o dolo y (iii) el nexo de causalidad respectivo.

**D. VINCULACIÓN TERCEROS CIVILMENTE RESPONSABLES**



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUTO N°: 000245

FECHA: 08 JUN 2018

PÁGINA 28 DE 36

**AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

Resulta del caso mencionar que, con el mismo objetivo de resarcimiento, la Ley 610 de 2000 faculta la vinculación de la compañía de seguros en calidad de tercero civilmente responsable.

Conforme al artículo 44 de la Ley 610 de 2000, una vez se identifique a las compañías aseguradoras que expidieron las pólizas globales y de manejo para las vigencias 1998 y 2011, amparando la gestión de los funcionarios de la **CÁMARA DE REPRESENTANTES**, que se llegaren a identificar como presuntos responsables fiscales por haber causado o contribuido en el acaecimiento del daño patrimonial que se reputa lesivo a los intereses económicos del Estado, se estudiará la procedencia de su vinculación en condición de terceros civilmente responsables, de conformidad con la habilitación jurídica contenida en el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, que señala:

***“Artículo 44. Vinculación del garante.** Cuando el presunto responsable, o el bien o contrato sobre el cual recaiga el objeto del proceso, se encuentren amparados por una póliza, se vinculará al proceso a la compañía de seguros, en calidad de tercero civilmente responsable, en cuya virtud tendrá los mismos derechos y facultades del principal implicado.*

*La vinculación se surtirá mediante la comunicación del Auto de apertura del proceso al representante legal o al apoderado designado por éste, con la indicación del motivo de procedencia de aquella.”*

**E. TRAMITE:**

El presente proceso de responsabilidad fiscal se adelantará por el procedimiento ordinario, toda vez que no se reúnen las condiciones señaladas en el artículo 98 de la Ley 1474 de 2011, para seguir el cauce del procedimiento verbal, siendo necesario en el desarrollo de éste establecer si el mismo se adelantará por el trámite de única o de doble instancia, según lo previsto en el artículo 110 de Ley 1474 de 2011.

**F. PRUEBAS INCORPORADAS Y DECRETADAS DE OFICIO :**

A la presente actuación serán incorporadas como pruebas los documentos arrimados dentro de actuación especial adelantada, así como aquellas allegadas en desarrollo del trámite de la Indagación Preliminar No. 8812-2017-002, iniciada mediante Auto No. 008 de 06 de febrero de 2017<sup>3</sup>.

Se considera del caso precisar que respecto de los documentos allegados mediante oficio con recibido 2017ER0077878 de 10 de agosto de 2017, dirigido a la Directora de Vigilancia Fiscal de la CGR, por parte del Jefe de Personal del Congreso de la República, contenido en los folios 1145 a 1151, teniendo en cuenta que la mencionada fecha de recibo supera el término máximo de seis (6) meses, de conformidad con los artículos 22 y 39 de la Ley 610 de 2000, no se tendrán como prueba válida dentro de este proceso.

<sup>3</sup> Folios 29 a 36, carpeta principal # 1.



AUTO N°: 000245

FECHA: 08 JUN 2018

PÁGINA 29 DE 36

AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

De otra parte, es pertinente señalar que como atrás quedó anunciado, previo a efectuar el correspondiente traslado del informe de apoyo técnico radicado con el **Oficio No. 2017IE0062703 de 04 de agosto 2017**, rendido por la profesional universitaria LUISA FERNANDA MIRANDA SOTO, adscrita a la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el sector Gestión Pública e Instituciones Financieras, se requiere solicitar la complementación de aquél, en el sentido de establecer la cuantía final del daño acaecido, en tanto la suma estimada cubre los pagos realizados hasta antes de la fecha de corte fijada en el informe técnico, es decir, hasta el 31 de mayo de 2017, por lo que se habrán de liquidar de ser el caso, las erogaciones que por tal concepto se hayan realizado con posterioridad a esa fecha, y de las sumas en las que dicho incentivo se tuvo como factor salarial, para así garantizar el derecho de contradicción de los sujetos procesales.

Así mismo, considerando que en materia de responsabilidad fiscal le corresponde al Estado la carga de la prueba, y en armonía con ello resulta un deber para el operador de responsabilidad fiscal ejercer la facultad de decretar oficiosamente medios de prueba, cuando estos sean necesarios o convenientes para probar los hechos materia de la actuación, resulta procedente ordenar el decreto de pruebas de oficio.

De ahí que este Despacho considera conducente, pertinente y útil decretar de oficio la práctica de los siguientes medios probatorios, aclarando que de no hallarse en los archivos la información requerida, deberá expedirse certificación en la que se haga constar cada hecho respectivo:

#### ➤ DOCUMENTALES

**A. Oficiar a la CÁMARA DE REPRESENTANTES** para que remita y suministre la información y/o documentación que se relaciona a continuación:

1. Certificación en la que en detalle se indique acerca de los periodos durante los cuales **CARLOS ANTONIO ARDILA BALLESTEROS**, fungió como Presidente de la Mesa Directiva de esa Corporación, describiendo las funciones que le fueron asignadas para dicho cargo anexando la parte pertinente del Manual de Funciones y Procedimientos vigente para el momento en que desempeñó el cargo, junto con el acto administrativo mediante el cual fueron adoptados, así como los datos de identificación y último registro de dirección de residencia, teléfono y demás datos de ubicación.
2. Certificación en la que en detalle se indique acerca de los periodos durante los cuales **ANTENOR DURÁN CARRILLO** fungió como Vicepresidente de la Mesa Directiva de esa Corporación, describiendo las funciones que le fueron asignadas para dicho cargo anexando la parte pertinente del Manual de Funciones y Procedimientos vigente para el momento en que desempeñó el cargo, junto con el acto administrativo mediante el cual fueron adoptados, así como los datos de



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUTO N°: 000245

FECHA: 08 JUN 2018

PÁGINA 30 DE 36

**AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

identificación y último registro de dirección de residencia, teléfono y demás datos de ubicación.

3. Certificación en la que en detalle se indique acerca de los periodos durante los cuales **DIEGO VIVAS TAFUR** fungió como Secretario General de la Mesa Directiva de esa Corporación, describiendo las funciones que le fueron asignadas para dicho cargo anexando la parte pertinente del Manual de Funciones y Procedimientos vigente para el momento en que desempeñó el cargo, junto con el acto administrativo mediante el cual fueron adoptados, así como los datos de identificación y último registro de dirección de residencia, teléfono y demás datos de ubicación.
4. Certificación en la que se indique el resultado de las calificaciones de desempeño que obtuvo **HAROLD ALFONSO BUSTAMENTE SOTO** desde el 02 de febrero de 1996 al 01 de junio de 2011, fecha en la cual se expidió la Resolución No.1354, mediante la cual se le otorgó a su favor la prima técnica por parte de la **CAMARA DE REPRESENTANTES**, junto con la documentación soporte de dicha información.
5. Certificación en la que se indique el resultado de las calificaciones de desempeño que obtuvo **CARMENZA CRUZ PARRA** desde el 26 de febrero de 1996 al 01 de junio de 2011, junto con la documentación soporte de dicha información.
6. Certificación en la que se indique el resultado de las calificaciones de desempeño que obtuvo **AMANDA TINJACA RUIZ**, desde el 13 de febrero de 1996 al 01 de junio de 2011, fecha en la que se expidió la Resolución No.1348, mediante la cual se le otorgó a su favor la prima técnica por parte de la **CAMARA DE REPRESENTANTES**, junto con la documentación soporte de dicha información.
7. Certificación en la que se indique de manera detallada el valor pagado desde el 31 de mayo de 2017 a la actualidad, por concepto de prima técnica respecto de: CAYO RICARDO BUITRAGO ESPEJO, HAROLD ALFONSO BUSTAMENTE SOTO; AMANDA TINJACA RUIZ, CARMENZA CRUZ PARRA, GIOVANNY DURLEY GONZALEZ COLORADO, DIANA GONZALEZ RODRÍGUEZ, HUMBERTO GUERRERO ACOSTA, HERNANDO RODRÍGUEZ CASTILLA, ITA MARÍA MARTINEZ LOZANO, ALVARO TORRES TELLEZ y ROSALBA CARVAJAL PARRA, incluyendo además, respecto de cada uno de los pagos efectuados, las sumas liquidadas, en las que la prima técnica concedida y pagada, se tuvo como factor salarial desde la fecha en la que se inició el pago de aquella, a la actualidad, junto con la documentación soporte de dicha información.
8. Copia de las Pólizas Globales de Manejo constituidas por la Cámara de Representantes para las vigencias 1998 y 2011, las cuales deberán allegarse junto con sus anexos, certificados modificatorios, condiciones generales y el listado de funcionarios amparados por las mismas.

**AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

9. Certificación en la que conste el valor de la menor cuantía que para efectos de contratación rigió en la Cámara de Representantes para las vigencias 1998 y 2011 o en su defecto el monto del presupuesto de la misma aprobado para dicha vigencia, para los efectos previstos en el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011.
- B. Oficiar a la **EPS SANITAS** para que remita y suministre la información que se encuentre en sus bases de datos relacionada con el domicilio personal y laboral registrado los afiliados activos que se enuncian a continuación:
1. **CARLOS ANTONIO ARDILA BALLESTEROS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.827.774
  2. **ANTENOR DURÁN CARRILLO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.804.887
- C. Oficiar a la **NUEVA EPS S.A.**, para que remita y suministre la información que se encuentre en sus bases de datos, relacionada el domicilio personal y laboral registrado del afiliado activo, **DIEGO VIVAS TAFUR** identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.557.343
- D. Oficiar a las **Empresas de Telefonía Celular** para que remitan y suministren la información relacionada con el último lugar de domicilio, números telefónicos y/o cualquier otro aspecto registrado en sus archivos y base de datos a nivel nacional, que nos permita ubicar a las siguientes personas:
1. **CARLOS ANTONIO ARDILA BALLESTEROS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.827.774
  2. **ANTENOR DURÁN CARRILLO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.804.887
  3. **DIEGO VIVAS TAFUR** identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.557.343

De acuerdo con las consideraciones precedentes, la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República,

**RESUELVE:**

**PRIMERO.- ORDENAR LA APERTURA POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL** para establecer la responsabilidad fiscal que corresponda por el daño patrimonial que se reputa causado a la **CÁMARA DE REPRESENTANTES**, de conformidad con las consideraciones que anteceden.

**SEGUNDO.- VINCULAR COMO PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES**, a este proceso, conforme lo previsto en la parte considerativa de la presente





CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUTO N°: 000245

FECHA: 08 JUN 2016

PÁGINA 32 DE 36

AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

providencia, a las personas naturales que se relacionan a continuación y en su oportunidad ESCUCHARLAS EN EXPOSICIÓN LIBRE Y ESPONTÁNEA. La citada diligencia se cumplirá previa expedición y notificación del Auto que fije fecha y hora para la recepción de la misma:

1. **JAIRO JARAMILLO MATIZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 13.452.839 en su condición de Director Administrativo de la Cámara de Representantes, para la época de los hechos.
2. **DIANA ROJAS BRIÑEZ**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 52.967.933 en su condición de Jefe de la División de Personal, para la época de los hechos.
3. **BLANCA EMMA SALAZAR BONILLA**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 41.755.873 en su condición de Jefe de la División Financiera, para la época de los hechos.
4. **CARLOS ALBERTO FLOREZ ROJAS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No 19.395.487 en su condición de Jefe de la División Jurídica para la época de los hechos, y
5. **CARLOS ANTONIO ARDILA BALLESTEROS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.827.774, en su condición de Presidente de la Mesa Directiva de la **CÁMARA DE REPRESENTANTES** para la época de los hechos en relación con a **ALVARO TORRES TELLEZ**.

**TERCERO.- INCORPORAR Y TENER COMO PRUEBAS**, asignando el valor legal que en derecho corresponde, los documentos arrimados dentro de actuación especial adelantada, así como aquellas allegadas dentro del trámite de la Indagación Preliminar No. 8812-2017-002, iniciada mediante Auto No. 008 de 06 de febrero de 2017.

**CUARTO.- DECRETAR** de oficio la práctica de las siguientes pruebas:

➤ **DOCUMENTALES**

**A. Oficiar a la CÁMARA DE REPRESENTANTES**, para que remita y suministre la información y/o documentación que se relaciona a continuación:

1. Certificación en la que en detalle se indique acerca de los periodos durante los cuales **CARLOS ANTONIO ARDILA BALLESTEROS**, fungió como Presidente de la Mesa Directiva de esa Corporación, describiendo las funciones que le fueron asignadas para dicho cargo





CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUTO N°: 000245

FECHA: 08 JUN 2018

PÁGINA 33 DE 36

AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

anexando la parte pertinente del Manual de Funciones y Procedimientos vigente para el momento en que desempeñó el cargo, junto con el acto administrativo mediante el cual fueron adoptados; así como los datos de identificación y último registro de dirección de residencia, teléfono y demás datos de ubicación.

2. Certificación en la que en detalle se indique acerca de los periodos durante los cuales **ANTENOR DURÁN CARRILLO**, fungió como Vicepresidente de la Mesa Directiva de esa Corporación, describiendo las funciones que le fueron asignadas para dicho cargo anexando la parte pertinente del Manual de Funciones y Procedimientos vigente para el momento en que desempeñó el cargo, junto con el acto administrativo mediante el cual fueron adoptados; así como los datos de identificación y último registro de dirección de residencia, teléfono y demás datos de ubicación.
3. Certificación en la que en detalle se indique acerca de los periodos durante los cuales **DIEGO VIVAS TAFUR**, fungió como Secretario General de la Mesa Directiva de esa Corporación, describiendo las funciones que le fueron asignadas para dicho cargo anexando la parte pertinente del Manual de Funciones y Procedimientos vigente para el momento en que desempeñó el cargo, junto con el acto administrativo mediante el cual fueron adoptados; así como los datos de identificación y último registro de dirección de residencia, teléfono y demás datos de ubicación.
4. Certificación en la que se indique el resultado de las calificaciones de desempeño que obtuvo **HAROLD ALFONSO BUSTAMENTE SOTO** desde el 02 de febrero de 1996 al 01 de junio de 2011, fecha en la cual se expidió la Resolución No.1354, mediante la cual se le otorgó a su favor la prima técnica por parte de la **CAMARA DE REPRESENTANTES**, junto con la documentación soporte de dicha información.
5. Certificación en la que se indique el resultado de las calificaciones de desempeño que obtuvo **CARMENZA CRUZ PARRA** desde el 26 de febrero de 1996 al 01 de junio de 2011, junto con la documentación soporte de dicha información.
6. Certificación en la que se indique el resultado de las calificaciones de desempeño que obtuvo **AMANDA TINJACA RUIZ**, desde el 13 de febrero de 1996 al 01 de junio de 2011, fecha en la que se expidió la Resolución No.1348, mediante la cual se le otorgó a su favor la prima técnica por parte de la **CAMARA DE REPRESENTANTES**, junto con la documentación soporte de dicha información.



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUTO N°: 000245

FECHA: 08 JUN 2018

PÁGINA 34 DE 36

AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

7. Certificación en la que se indique de manera detallada el valor pagado desde el 31 de mayo de 2017 a la actualidad, por concepto de prima técnica respecto de: CAYO RICARDO BUITRAGO ESPEJO, HAROLD ALFONSO BUSTAMENTE SOTO; AMANDA TINJACA RUÍZ, CARMENZA CRUZ PARRA, GIOVANNY DURLEY GONZALEZ COLORADO, DIANA GONZALEZ RODRÍGUEZ, HUMBERTO GUERRERO ACOSTA, HERNANDO RODRÍGUEZ CASTILLA, ITA MARÍA MARTINEZ LOZANO, ROSALBA CARVAJAL PARRA ALVARO TORRES TELLEZ, incluyendo además, respecto de cada uno de los pagos efectuados, las sumas liquidadas, en las que la prima técnica concedida y pagada, se tuvo como factor salarial desde la fecha en la que se inició el pago de aquella, a la actualidad, junto con la documentación soporte de dicha información.

8. Copia de las Pólizas Globales de Manejo, constituidas por la Cámara de Representantes para las vigencias 1998 y 2011, la cual deberán allegarse junto con sus anexos, certificados modificatorios, condiciones generales y el listado de funcionarios amparados por las mismas.

9. Certificación en la que conste el valor de la menor cuantía que para efectos de contratación rigió en la Cámara de Representantes para las vigencias 1998 y 2011 o en su defecto el monto del presupuesto de la misma aprobado para dicha vigencia, para los efectos previstos en el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011.

B. Oficiar a la **EPS SANITAS**, para que remita y suministre la información que se encuentre en sus bases de datos, relacionada el domicilio personal y laboral registrado los afiliados activos que se relacionan a continuación:

1. **CARLOS ANTONIO ARDILA BALLESTEROS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.827.774
2. **ANTENOR DURÁN CARRILLO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.804.887

C. Oficiar a la **NUEVA EPS S.A.**, para que remita y suministre la información que se encuentre en sus bases de datos, relacionada el domicilio personal y laboral registrado del afiliado activo **DIEGO VIVAS TAFUR** identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.557.343

D. Oficiar a las **Empresas de Telefonía Celular** para que remitan y suministren la información relacionada con el último lugar de domicilio, números telefónicos y/o cualquier otro aspecto registrado en sus archivos

1189



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUTO N°: 000245

FECHA: 08 JUN 2018

PÁGINA 35 DE 36

**AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

y base de datos a nivel nacional, que nos permita ubicar a las siguientes personas:

1. **CARLOS ANTONIO ARDILA BALLESTEROS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.827.774
2. **ANTENOR DURÁN CARRILLO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.804.887
3. **DIEGO VIVAS TAFUR** identificado con la cédula de ciudadanía No.4.557.343

Para todos los efectos, en caso de no hallarse en los archivos la anterior información y/o documentación solicitada, expedir certificación en la que conste tal hecho.

- Las demás pruebas que surjan en el desarrollo de las diligencias que se adelanten y que se consideren pertinentes y conducentes para lograr el esclarecimiento de los hechos.

**QUINTO.- COMUNICAR** el inicio del presente proceso de responsabilidad fiscal al representante legal de la **CÁMARA DE REPRESENTANTES**, a efectos de que preste la debida colaboración y diligencia en la atención y respuesta de los requerimientos que surjan en desarrollo del mismo, **ADVIRTIÉNDOLE** el carácter reservado de la actuación, según las voces del artículo 20 de la Ley 610 de 2000.

**SEXTO.- NOTIFICAR PERSONALMENTE** la presente providencia, atendiendo a lo previsto en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011 y en los términos de lo señalado en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 a los presuntos responsables fiscales que se identifican a continuación, haciéndoles saber que contra el presente auto no procede recurso alguno:

- **JAIRO JARAMILLO MATIZ**, en la calle 5N No. 3E-186, Ceiba II, Cúcuta, Departamento Norte de Santander.
- **DIANA ROJAS BRIÑEZ**, en la calle 57No. 57A-37, Bloque 67 Apto. 201, Bogotá, D.C.
- **BLANCA EMMA SALAZAR BONILLA**, en la Carrera 48 No. No. 150A-63, Apto 402, Bogotá, D.C.
- **CARLOS ALBERTO FLOREZ ROJAS**, en la calle 152 No. 57-62, interior 1, Apto. 203, Pereira Departamento de Risaralda.



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUTO N°: 000245

FECHA:

08 JUN 2018

PÁGINA 36 DE 36

AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

- CARLOS ANTONIO ARDILA BALLESTEROS, en la carrera 7 No.8-68, Bogotá, D.C.

**SÉPTIMO.- DESIGNAR** al profesional universitario **Byron Damian Erazo Mendoza** como funcionario sustanciador del presente proceso de responsabilidad fiscal, quien deberá darle impulso oficioso al proceso, proyectar las decisiones de fondo y de trámite a que haya lugar, así como practicar las pruebas que deban surtirse en relación con el trámite de la presente actuación.

**OCTAVO.- INFORMAR** que contra la presente providencia **NO PROCEDE RECURSO** alguno conforme lo establece la parte final del inciso segundo del artículo 40 de la Ley 610 de 2000.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

  
**SORAYA VARGAS PULIDO**

Contralora Delegada para Investigaciones,  
Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva

Proyectó: BYRON DAMIAN ERAZO MENDDZA  
Profesional Universitario Designado

Revisó: JAVIER LEONARDO LÓPEZ HIGUERA  
Asesor de Gestión